Imprimir

Ser niño en Colombia es muy peligroso, también ser mujer, más si está en embarazo…y ser indígena y negro, y campesino, y estudiante, y sindicalista… ¡Ser pobre! Estos humanos tienen condena de muerte, porque el Estado no garantiza la vida y la seguridad de sus ciudadanos. A eso se llama en todas partes Estado fallido, pero Colombia no es un Estado fallido cualquiera, aquí las fuerzas armadas han vuelto sus armas contra la ciudadanía, con complacencia del ejecutivo.
Las víctimas son precisamente aquellos que el Estado debe proteger, los más vulnerables. Porque no basta que las políticas públicas se orienten a favorecer a los favorecidos, sino que precisa joder a los jodidos, no solo escatimando los derechos, sino orientando la fuerza pública a la defensa de mafiosos y terratenientes, permítase el pleonasmo, mientras tiene balazos para los de a pie.

Ahora los generales de la República se dedican a construir coartadas para justificar la carnicería contra civiles, y a presentar como normal asesinar a connacionales indefensos, como lo hizo recientemente el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia, que no está en guerra contra alguna potencia extranjera, o algún invasor, sino contra sus compatriotas. Decía este verdugo de un gobierno ilegítimo, a su vez gobernado por personajes oscuros, que era normal matar niños y mujeres en embarazo. El partido de gobierno aplaudió a rabiar esa confesión de crímenes de guerra.

Porque la degradación del conflicto armado colombiano trasciende la coartada de las manzanas podridas, además, en la descomposición de las fuerzas militares y de policía hay muchos protagonistas sin uniforme que se suelen beneficiar de las matazones que cometen los uniformados.

Matanzas como la del Putumayo, por la cual el partido de Uribe pasea a los generales en hombros, no son inmotivadas. Tampoco son fruto del azar. Corresponden a una visión política consolidada, hegemónica durante dos décadas, y tienen un fundamento racista: Discriminan a indígenas, negros, y pobres.

Como ha quedado claro en el actual debate electoral la derecha en Colombia no tiene una propuesta de país diferente a explotar sus recursos a cualquier costo. Para eso les estorba la población, a ellos que dicen ser candidatos de la gente les fastidia la gente. No conciben el país sino como una inmensa guaca, o una finca llena de vacas y sin gente.

Así, los que aplauden que los militares maten ciudadanos en indefensión, son los mismos que gritan que los están persiguiendo cuando se descubre cómo se abudinearon los dineros para la conectividad digital de los menores más excluidos. De igual manera, han hecho del PAE, Programa de Alimentación Escolar, un botín que se saquea cuantas veces fuese necesario, ofreciendo alimentos en estado de descomposición, volviendo más míseras las raciones, o simplemente hurtando el complemento completo, en su lugar se toma una foto del niño famélico frente a un plato rebosado, como indicador de cumplimiento, que algún copartidario del partido de gobierno ha de avalar el pago.

Y no es retórica opositora. El Instituto Nacional de Salud, INS, entidad del gobierno, reporta en abril de este 2022 cómo se incrementó la tasa de desnutrición infantil en Colombia en un 41.9 por ciento, 3.156 casos en los primeros dos meses, con relación al mismo período del año anterior, 2.224 casos.

En consecuencia, las muertes por desnutrición aumentan, llegando a registrarse más de cinco casos por semana, lo cual otorga al régimen colombiano otro podio de infamia, al ser el país suramericano que más niños mata de hambre.

Tampoco son casos aislados, en 26 de los 32 departamentos del país registran el fenómeno de desatención a la infancia, dejando de ser exclusivo de Guajira y Chocó. Así como no se circunscribe a niños indígenas y negros, tampoco se limita a los rurales: La hambruna infantil es parte ya del paisaje urbano, incluso en Bogotá.

El hambre es un arma de exterminio, de control natal, y de control social. Además, garantiza perpetuar la desigualdad social, ya que el menor con deficiencias nutricionales tiende a tener deficiencias en su desarrollo cognitivo, en su proceso de aprendizaje, en su socialización. En

su desempeño laboral participará de los oficios más viles en la división del trabajo.

Los niños tempranamente son segregados con criterios clasistas, hay educación para pobres y para ricos, salud para unos y no otros, y seguridad según la clase social. La cifra de menores asesinados por Luis Alfredo Garavito se usa para escandalizar, aunque Duque, Molano, y Zapateiro le disputan el título criminal. Si se mira el récord de los asesinos en serie, los colombianos puntean en los siglos XX y XXI, por su cantidad de víctimas, ningún otro asesino serial en el mundo alcanza más de tres centenares de víctimas en estos tiempos. Los criminales seriales en Colombia actúan sin cortapisas siempre que sus víctimas sean menores empobrecidos. Cuando el criminal sorprendido es de clase alta el establecimiento lo presenta como víctima, tal como lo hizo en el caso de Rafael Uribe Noguera. Para entender el fenómeno basta con ponerle apellido a las víctimas: son niños pobres, de ahí la inoperancia estatal.

Un proletario lo único que posee es su prole, sus hijos, y este Estado los deja inermes ante la criminalidad. Ya el paramilitar Carlos Castaño contaba que en su iniciación como sicario su hermano le enseñaba a no dejar niños sobrevivientes, ya que cuando crecieran se volverían enemigos. Este gobierno que tanto se inspira en el pensamiento paraestatal, parece seguir el dictado de Castaño, ya que dejaron de ser sujetos jurídicos especiales, vulnerables, y terminaron graduados de máquinas de guerra por el señor Molano, quien en su paso por Bienestar Familiar desarrolló tal fobia a los niños que ya no los considera sujetos de derechos.

¿Qué tipo de ciudadano se pretende construir con niños excluidos, perseguidos, asesinados? Ninguno. No se pretende que sean ciudadanos, sino mantener las condiciones de exclusión, que en Colombia equivalen a dos y tres cadenas perpetuas.

Los niños requieren, como dice la Constitución de 1991, que sus derechos prevalezcan sobre los demás derechos, porque con la plenitud de garantías a la infancia se logran la equidad y la armonía de una sociedad. Esperemos que de la actual contienda electoral surja un Estado que deje de ser el terror de la infancia, que ponga los derechos fundamentales al alcance de

los niños, y que las armas del Estado sean para defender a los infantes, nunca más para asesinarlos.

José Darío Castrillón Orozco

Foto tomada de: Las2orillas.co